



Barranquilla, septiembre de 2024.

SEÑORA:

Dra. MYRIAM MELISSA PASTRANA CALLE.

JUZGADO CATORCE (14°) CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

E.

S.

D.

Ref: Verbal de Responsabilidad Civil Rad. 08-001-31-53-014-2024-00146-00

Demandante: HERNANDO ENRIQUE MEZA ORTIZ y Otros.

Demandado: E.P.S. SURAMERICANA - E.P.S. SURA Nit. 800.088.702-2 - CLÍNICA PORTOAZUL S.A. - CPA Nit. 900.248.882-1 - JUAN FELIPE ARIAS BLANCO CC. 91.524.465 (Médico Tratante)

Asunto: Excepción previa.

Estimada Sra. Juez.

JHAROL JAIR SUAREZ PEREZ, abogado titulado y en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.129.534.006** expedida en Barranquilla, portador de la tarjeta profesional de abogados No. **344.542** del Honorable Consejo Superior de la Judicatura y correo electrónico debidamente inscripto en la RNA jharolsuarezabogado@gmail.com, asociado y suplente en el presente de la firma **AB SIERRA & ASOCIADOS DERECHO CORPORATIVO S.A.S.**, identificada con NIT. No. **901-711.801-2**, correo absierraabogadoscorp@gmail.com, representada legalmente por el Dr. **ABDON ALBERTO SIERRA GUTIERREZ**, identificado con C.C. No. **9.131.373** de Magangué - Bolívar, la cual funge como representante judicial del médico **JUAN FELIPE ARIAS BLANCO**, identificado con C.C. No. **91.524.465**, demandado dentro del proceso de la referencia, concurro respetuosamente a su digno despacho a fin de interponer excepciones previas de conformidad con los siguientes postulados facticos y jurídicos:

HECHOS:

1. Cursa en su despacho proceso declarativo de responsabilidad medica instaurado por los señores HERNANDO MEZA ORTIZ y otros en contra de EPS SURAMERICANA EPS SURA; CLINICA PORTOAZUL S.A y el medico JUAN FELIPE ARIAS BLANCO, cuya radicación es 8-001-31-53-014-2024-00146-00.-
2. La anterior demanda fue admitida mediante auto de fecha 24 de julio de 2024, en el cual, además se denegó una cautela y se dispuso prestar caución para el decreto de otra.
3. El CGP y la ley 2213 de 2022 expresan que antes de la presentación de una demanda debe intentarse, con calidad de presupuesto de procedibilidad, la audiencia de conciliación entre las partes a trabarse en la litis judicial y además, la ley en comento impuso a los presuntos demandantes dentro de un proceso judicial, el envío de la demanda y sus anexos a los posibles demandados, de manera simultánea a su envío a la administración de justicia, imponiendo como sanción al incumplido de estas cargas, el rechazo de la demanda.
4. Sin embargo, esas mismas normas, excepcionan de las anteriores cargas procesales, al actor que, en el cuerpo de la demanda, soliciten el decreto de medidas cautelares, de manera que la demanda se admita y se decreten dichas medidas cautelares, desde antes de su notificación e impedir una posible situación de insolvencia en los demandados.



5. Atendiendo esas excepciones a la ley de las cargas procesales, el demandante en el cuerpo de la demanda solicita unas medidas cautelares, como son:
 - a) Oficiar a las autoridades de inmigración para que eviten la salida del país del galeno JUAN FELIPE ARIAS BLANCO, y
 - b) Que se decrete la inscripción de la demanda en el registro de existencia y representación de Cámara de Comercio de las sociedades demandadas, es decir en su nombre.
6. En el auto admisorio de la demanda, se deniega la primera de las cautelares solicitadas, por ser abiertamente improcedente y no cumplir el demandante con su carga jurídica de justificar frente a los principios constitucionales, la razonabilidad de la misma.
7. Respecto de la segunda, le ordena al demandante que preste caución por la suma de \$190.000.000 para determinar su procedente decreto, para lo que le concede al actor un término de 20 días para su presentación.
8. El fundamento legal de la solicitud y posible decreto de la cautela se apoya en el literal (a) del artículo 590 del CGP que a su letra expresa:
 - a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes.
Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.
 - b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual"

Como puede verse, el CGP expresamente permite el decreto de medidas cautelares de inscripción de demanda en bienes sujetos a registro y secuestro de bienes muebles en aquellos procesos que de una u otra forma la pretensión esté ligada a la discusión de derechos reales, especialmente el de dominio o cualquier otro real principal.

En el presente caso se trata que el Juez, en sentencia declare la existencia de una posible obligación en cabeza de los demandados y acorde con el artículo 665 del CC obligación es la relación entre dos personas y no respecto de derechos reales, habida cuenta que cuando se habla de obligación estamos frente a un derecho personal, totalmente ajeno a debate sobre dominio y cualquier derecho real principal o no.

Por ello, en esta clase de procesos, no proceden las cautelares pedidas por el demandante, ello, desprendido de un mero análisis exegético de la norma.

Segundo, el nombre de la persona jurídica, que igual que la persona natural, constituye un atributo de la persona y por tanto tiene carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, por lo que igualmente es una cautela improcedente e ilegal. Así lo ha expresado en oportunidades varias la jurisprudencia de los tribunales del país.

Finalmente, para cerrarle el camino al abuso e intento de fraude a que acuden algunos profesionales del derecho, la jurisprudencia ha asumido la línea jurídica que la sistemática del tema impone aceptar que para evitar el presupuesto de la conciliación como presupuesto para acudir a la acción judicial, las medidas cautelares que se pidan en la demanda deben ser igualmente procedente y legales, pero como se ha dejado de expresar, las aquí solicitadas son abiertamente improcedente e ilegales.



Pero igualmente, el apoderado de la parte demandante no da las explicaciones constitucionales que puedan hacer pensar que la solicitud de medidas cautelares se apoyan en las llamadas innominadas que normativamente se recogen en el literal C del artículo 590 del CGP, por lo que igualmente conduce al rechazo de las cautelas irregularmente solicitadas.

Consecuencia del razonamiento anterior, lo que se imponía para el demandante es que el actor adjuntara con su demanda la constancia negativa de la audiencia de conciliación pedida por la ley como presupuesto de procedibilidad y no haberlo hecho, encuadra perfectamente en la excepción previa de no contar con el libelo genitor del proceso con un anexo obligatorio que se encuentra recogida en el numeral 5 del artículo 100 del CGP.

PETICION:

Que en providencia que desate esta excepción previa, se ordene:

- 1.- La revocación del auto admisorio de la demanda de fecha 24 de julio de 2020 por no haber cumplido el demandante con el presupuesto de prejudicialidad de conciliación y de enviar la demanda y sus anexos a los demandados al momento de enviar la demanda a la administración de justicia, anexo obligatorio en esta clase de proceso.
- 2.- Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante.
- 3.- Además se condene en perjuicios, los cuales se cuantificaran en incidente posterior.

NOTIFICACIONES:

- AB SIERRA & ASOCIADOS DERECHO CORPORATIVO S.A.S., correo absierraabogadoscorp@gmail.com
- JHAROL SUAREZ, abogado suplente, correo electrónico debidamente inscripto en la RNA jharolsuarezabogado@gmail.com

De Usted, atte.

AB SIERRA & ASOCIADOS
Derecho Corporativo

JHAROL J. SUAREZ
C.C. No. 1.129.534.006
T.P. No. 344.542
E-mail: jharolsuarezabogado@gmail.com
Abogado suplente.